

Perú: construir la democracia desde la precariedad

HENRY PEASE GARCÍA

Quien observe desde fuera la política peruana encontrará algunas particularidades y no pocas paradojas que cuestionan la gobernabilidad y hacen dudar sobre las posibilidades de la democracia en la sociedad peruana. A pesar de esas dudas, han transcurrido ya siete años desde la inauguración del nuevo régimen constitucional; junto a éste se inauguró Sendero Luminoso, que nos embarcó en una guerra sucia, la cual puede ser usada por más de un totalitario para que vuelvan los militares.

¿Qué ofrece esta democracia a la juventud que en nuestro país se enfrenta al subempleo y al desempleo? ¿Qué le dice a más de 200 000 jóvenes que cada año ingresan a la fuerza laboral sin esperanzas de ser obreros estables? ¿No es acaso en la democracia que nosotros experimentamos las políticas neoliberales de Belaúnde? Una economía destruida por más de una década de políticas de estabilización es lo que recibe el presidente García en 1985. Pero en poco más de dos años, el populismo aprista empieza un brusco desgaste, luego de enfrentar, sorpresivamente, a los bancos, cabeza visible de los monopolios. La vacilación aprista hace que, tras un tedioso debate, a fin de cuentas democrático, se apruebe una ley farragosa con aspectos inaplicables que refuerzan la ofensiva derechista, y que el gobierno vacile entre actos de fuerza y permisividad, llegando a negociar con los propios banqueros afectados sobre la aplicación de la ley que los expropia, para luego romper y volver a pelear.

¿Quedará hecho trizas el marco institucional? Para un viejo líder derechista el solo anuncio de expropiación obligaba a proclamar el derecho a la insurgencia, mientras que hoy, para un general, conocido conspirador, el problema del Perú sólo se resuelve matando, y para eso hay que golpear y acabar primero con la democracia.

En los ochenta nos hemos acostumbrado a la precariedad económica y política. Construir la democracia desde esa precariedad supone entender las crisis sucesivas en la economía, la sociedad y la política, buscando darles curso en función de una alternativa de masas que no cierre los espacios abiertos, que privilegie la participación y que entienda la lucha del pueblo —construyendo factores de poder— como proceso colectivo que desde abajo va armando mínimos de consenso. Contra esta perspectiva

se sitúan los que desde uno u otro bando propugnan por la militarización, y si tienen éxito, nos acercarán al drama salvadoreño o, por rasgos geopolíticos, al interminable Líbano.

Para comprender el proceso político de esta década hay que comenzar distinguiendo la apertura democrática peruana de otras ocurridas en el Cono Sur, porque se trata de tiempos, situaciones y hasta procesos distintos. Procuraremos explicar el proceso de democratización que precede a esta apertura y que explica diferencias con otras experiencias de América Latina, como el papel protagónico del movimiento popular y de Izquierda Unida, que sólo pueden evaluarse en su contexto. Intentaremos luego examinar los rasgos del régimen político actual, los gobiernos que ocuparon tal espacio y las tensiones que caracterizan el presente.

LA APERTURA DEMOCRÁTICA EN CONTRASTE CON EL CONO SUR

Comencemos por el carácter de las dictaduras de los setenta. En Argentina, Uruguay y Chile se trata de dictaduras ligadas a modelos económicos neo-liberales o liberales a secas, que se asocian a los grandes monopolios transnacionales, su lógica y sus demandas. En cambio, el Perú viene de una dictadura militar que acaba de cancelar la dominación oligárquica y enfrenta de manera radical a la dominación estadounidense, realizando una amplia reforma agraria y generando un importante proceso de democratización en la sociedad (Velasco, 1968-1975).¹ La crisis del proyecto militar, la contrarreforma y un movimiento de contención de las organizaciones populares son los rasgos que tiene en común la dictadura de Morales Bermúdez, que sucede a Velasco, con las del Cono Sur; pero las diferencias se mantienen, y no sólo en cuestión de grados.

En efecto, en el Cono Sur, las dictaduras surgen para derrotar a la izquierda que buscaba el cambio social con iniciativas que varían desde la aventura revolucionaria guerrillera hasta procesos dentro de la constitucionalidad y desarrollos en el interior del complejo populismo argentino o brasileño. Si la represión se da en función de lo que hay que destruir o desmontar, las diferencias con el Perú de Morales Bermúdez son evidentes. Lo que Morales Bermúdez desmonta entre 1975 y 1980 es un conjunto de reformas hechas "desde arriba", con el límite de la misma institucionalidad castrense que condujo el velasquismo y enfrentando al movimiento popular que, si bien es importante y muy significativo en contraste con la historia peruana anterior, dista mucho de lo que significaban en un caso la guerrilla urbana en Argentina o Uruguay y en

¹ Sobre esta etapa hay una amplia bibliografía. En particular *The Peruvian Experiment Reconsidered*, editado por Cynthia McClintock y Abraham Lowental, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1983. Véase también Pease García, Henry, *El ocaso del poder oligárquico*, Lima, Desco, 1986, 4ª ed.

otro la sólida institucionalidad partidaria dentro de la cual se hizo fuerte la alternativa socialista chilena.

Es más, las dictaduras del Cono Sur tuvieron un cierto carácter fundacional, en su pretensión de desmontar el estado precedente e imponer un proyecto neo-liberal. En el Perú comienza una gradual liberalización con la dictadura de Morales Bermúdez (1975-1980) y las políticas neo-liberales se aplican sólo después, dentro de la apertura democrática, en el gobierno de Belaúnde (1980-1985) que inaugura el régimen constitucional. Y ni uno ni el otro lograron desmontar el estado heredado del velasquismo, con fuerte capacidad intervencionista en la economía.

Las diferencias se producen también en el propio proceso de apertura democrática. En el Perú, la apertura está influida por la lucha del Movimiento Popular, que llega a su punto culminante en los paros nacionales de 1977-1978 y que la dictadura enfrenta no sólo con represión, sino con el propio proceso de apertura. La izquierda, en todas sus vertientes, se incorpora al escenario abierto en este proceso desde 1978. El nuevo régimen político incluye a todos, por primera vez, en la legalidad y el escaño parlamentario. Es que esa izquierda, que no se unió sino hasta después de 1980, no había sido derrotada militarmente, como en el Cono Sur.

Las diferencias se acentúan conforme nos acercamos al presente. Tras la apertura democrática, el movimiento popular tiene continuidad a pesar de varias derrotas políticas y logra espacios importantes. Sustenta la unificación de la izquierda,² sus triunfos electorales y también, en buena medida, el triunfo del APRA, que si bien es un partido lejano a ese movimiento popular de los setenta, sale de la crisis cambiando de liderazgo y discurso, y acercándose al discurso izquierdista con un fuerte contenido populista. En el Cono Sur vemos hoy regímenes básicamente liberales —sin el dogmatismo ya de los Chicago boys— mientras en el Perú hay un giro hacia el populismo con el discurso izquierdista de Alan García.

Pero casi desde el comienzo del régimen constitucional, el Perú enfrenta la guerrilla de Sendero Luminoso y en el combate contra ésta logra imponerse una concepción y una estrategia antisubversiva que responde con el terrorismo de Estado al terrorismo senderista. No hay comparación aquí entre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura militar, y las producidas en el combate de dos gobiernos democráticos contra Sendero Luminoso. Si bien la extrema derecha no logró

² A fines de 1980 se constituye Izquierda Unida a partir de la alianza del Partido Comunista Peruano, el Partido Socialista Revolucionario, la Unión de Izquierdas Revolucionarias, el FOCEP, el Partido Comunista Revolucionario y tres partidos que luego se fusionan en uno, el Partido Unificado Mariateguista. Luego se agrega Acción Política Socialista y se convoca a muchos izquierdistas sin partido a ser parte del frente. Gana las elecciones de Lima, el 30% del país, con Alfonso Barrantes Lingán como alcalde, y en las presidenciales de 1985 queda en segundo lugar.

sus objetivos (explicitados desde 1980 en los intentos de excluir legalmente a la izquierda y de colocarla en un mismo saco con el terrorismo), la precariedad democrática se ha acentuado. Y aun así, con dificultades, las libertades constitucionales han permitido algunos frenos y varios retrocesos en las aventuras contrainsurgentes que siembran su propio terror y tienden a ampliar el campo enemigo.

Estos fenómenos no son parte de los procesos que observamos en el Cono Sur y posiblemente hacen más precaria la experiencia peruana en la cual ahora se añade una profunda polarización política generada por el intento del gobierno aprista de estatizar la banca, las financieras y las empresas de seguros. Una derecha reunificada ha tomado la iniciativa encabezando la oposición y, como su bolsillo ha sido tocado, llama incluso a la insurgencia frente al orden constitucional que considera quebrado.

Claro que estas diferencias vienen de lejos. Antes de las dictaduras de los setenta, los países del Cono Sur eran sociedades más homogéneas, más urbanas, con mayor desarrollo institucional que el Perú. Habían superado, con o sin liquidación, la dominación oligárquica, mucho antes que el Perú. La gran empresa monopólica instalada en esos países no sólo es mayor, sino más consistente y mejor integrada al conjunto de la dominación burguesa. En el Perú se logró asentar algunos grandes grupos económicos en función de su capacidad de adaptarse al gobierno militar. La mayoría del empresariado vivió este proceso de tumbo en tumbo, enfrentando como comunista al velasquismo que les abría un significativo espacio modernizado, apostando a Belaúnde el ochenta tras la bandera de "trabajar y dejar trabajar", para luego sorprenderse ante el giro neo-liberal de éste, que los enfrentó a la competencia externa y destruyó aún más la industria nativa, dejándolos en la más profunda y recesiva crisis. Nuevamente hoy se enfrentan a un gobierno que, tras darles todos los incentivos, les voltear la cara; lo califican otra vez como a Velasco y oscilan ya entre la doble duda de regresar a su intermitente apuesta por los militares o, recordando que éstos no les fueron fieles ni fueron coherentes, aspirar a unificar a la derecha para ser gobierno por sí mismos.

Este proceso muestra debilidades en el propio campo burgués, dentro de su fuerza relativa, y abre interrogantes que es preciso analizar. Pero para el contraste sirve la ilustración, porque aquí la inconsistencia de la burguesía, que viene de lejos, se reproduce en nuevas situaciones, da la impresión de menor solidez en la concreción de su capacidad de ejercicio real de la dominación política y económica en una sociedad que es mucho más heterogénea que la de los países del Cono Sur, mucho más entrapada económicamente y tantas veces vista en un recurrente callejón sin salida.

La comparación de los procesos de apertura puede ser útil para un intento que lleve a evaluar su consistencia. Ciertamente, nos faltan elementos para la comparación porque conocemos mucho más del Perú que del Cono Sur y éste no muestra, además, un proceso uniforme. Una pregunta

común para evaluar ambos procesos puede ser la que se refiere a lo que ha cambiado durante las dictaduras con respecto a las experiencias democráticas precedentes. Establecer si este tiempo político es democratizante sólo en tanto reacción primaria contra la brutalidad de las dictaduras. Evaluar los procesos de democratización para encontrar aquéllo que adquiere permanencia y arraigo en la sociedad y en la cultura política. Las instituciones y la capacidad de éstas para vincular partes en conflicto requieren un estudio más complejo, porque aunque aparentemente es fácil la generalización, resulta difícil asumir como totalidad una realidad tan heterogénea.

DEMOCRATIZACIÓN Y APERTURA DEMOCRÁTICA

Cualquiera que haya visitado Lima décadas atrás y regrese hoy encontrará un cambio básico: la ciudad de los blancos, conservadores y aristócratas quedó atrás. Lima expresa hoy a "todas las sangres" del Perú. En sus calles, con mucho desorden, los vendedores ambulantes, por miles, han impuesto sus reglas de juego a los alcaldes, tanto civiles como militares, elegidos o nombrados a dedo. Son los ricos los que han tenido que emigrar, primero del área central a San Isidro y Miraflores y luego a la Molina o Monterrico, porque con ardua lucha el poblador migrante autoconstruyó la parte más significativa de la ciudad, a pesar de todos los palos, la muerte y la miseria que impuso el poder que enfrentaban.

Las décadas de los setenta y ochenta expresan, en el campo y la ciudad, un proceso que abre la vigencia amplia y progresiva de la organización popular independientemente del Estado, o que al final de cuentas se autonomiza de éste. Ciertamente, la reforma agraria entregó la tierra a muchos campesinos, pero el proceso fue tal que los terminó enfrentando al Estado. Las organizaciones campesinas de larga y nueva data florecieron y se mantienen a pesar del sistemático esfuerzo de desmontaje y cooptación hecho por el Estado desde 1975 por razones contradictorias en apariencia y en realidad complementarias. El movimiento obrero logra centralización y dirección política en los setenta y combate por la democratización con peso importante en todo el período. Las ciudades se convierten en un hervidero de organizaciones marcadas primero por la lucha por un lote de terreno y luego por estrategias de supervivencia frente a la crisis. Parte de estas últimas serán muy diversas actividades de pequeña producción y ciertamente el comercio ambulante.

Frente a la dictadura de Morales Bermúdez todos estos niveles de organización se movilizan hasta nuclearse en una misma dirección y enfrentar al gobierno con los paros nacionales de 1977 y 1978. Dentro del propio aparato estatal, maestros y empleados públicos asumen similar comportamiento y enfrentan un proceso de radicalización muy marcado por la demanda salarial inmediata. Es a partir de este movimiento popular que la apertura democrática tiene un componente propio en la lucha del pueblo contra la dictadura; sin embargo, el paro nacional del 19 de julio

de 1977 que logra derribar el estado de emergencia y el toque de queda, reclamaba "abajo la dictadura", pero no se proponía explícitamente llamar a elecciones, proceso que, sin embargo, se hizo posible por esta ofensiva.

Esto evidencia un proceso de democratización que supuso previamente algunos cambios en las relaciones sociales básicas (la desaparición del gran terrateniente y las relaciones semi-serviles; la informalización de parte de la clase obrera e incluso de la empleocracia; la alteración de sucesivos escenarios políticos) y un cambio cultural tanto en sentido amplio como en el más específico de la cultura política. En este nivel, quien recuerde el componente racista propio del ordenamiento oligárquico y la forma en que se evidenciaba en Lima, y contraste eso con la realidad actual, verá allí suficientes indicios de la enormidad del cambio.

Se trata así de un proceso de democratización situado en la sociedad pero que involucra al Estado. No nos referimos tan sólo a sus antecedentes, en el amplio proceso migratorio, y la urbanización acelerada que se produce en los cincuenta y sesenta, sino también al terremoto político que para el viejo orden oligárquico significó Velasco cuando recogió y recreó anteriores propuestas de cambio. Nos referimos sobre todo a la insurgencia, dentro de este proceso, de un movimiento popular que ha sido y es capaz de ir imponiendo parcialmente términos al proceso político global y ha contribuido a la imposibilidad de que la burguesía reformada pueda desarrollar un Estado y un proyecto coherentes con sus necesidades globales.

Con la mediación de reformismos y populismos de rápido fracaso, este proceso de democratización ha avanzado en la medida en que asentó y a su vez reforzó la organización popular autónoma o autonomizada del Estado. Y en tanto que el movimiento popular pesa ya en la vida política, el proceso de democratización y la apertura democrática tienen puntos de contacto que pudieran no darse en otros casos.

Así, en el nuevo régimen político, la importancia adquirida por los gobiernos locales ganados por la Izquierda Unida en áreas populares urbanas y rurales, y la misma existencia de ésta, han sido un medio para que los dirigentes populares de los setenta accedan al Estado, vinculen el fortalecimiento del movimiento popular con la gestión de nuevos espacios desde donde tienen la capacidad de plantearse la democratización del Estado y, aún con tropiezos y límites, den rumbo a una fase del proceso de democratización, que significa "desestatización" en el sentido participatorio, y descentralización de la función pública, para acercarla al nivel de la vida cotidiana del pueblo al tiempo que se fortalece la democracia local.

El tema de las aperturas democráticas seguirá evocando un "momento de tránsito" de la dictadura a la democracia política, con un proceso que lleva a ese cambio y otro que lo consolida. Puede o no implicar un previo proceso de democratización o desatar otro. Los acuerdos que hacen posi-

ble la apertura pueden impedir que el cambio social se abra paso, o asegurar que los sectores que lo impulsan no sean fuerza política, al menos por un buen tiempo.

El cambio social implícito en el proceso de democratización no tiene que limitarse a lo aquí recordado para el Perú. Varios de esos rasgos corresponden al atraso relativo de la sociedad peruana, aún bajo el dominio oligárquico en los sesenta, respecto del Cono Sur, y pueden ser comparados por otros países andinos. El significado de los cambios que origina la promoción de la mujer y el combate de viejas concepciones machistas que se han trasladado de la sociedad tradicional a la moderna tiene, por ejemplo, una potencialidad enorme que en el Cono Sur o aquí lograría similar impacto si fuera parte efectiva de un proceso de democratización, entendido como una conversión del pueblo postergado en sujeto de la política, sujeto colectivo además de ciudadano, lo primero como fuente de poder —organización e iniciativa— y lo segundo como fuente de derecho y condición de libertad. Aquí cabe recordar con Bobbio que los sujetos colectivos son parte constitutiva de la actual democracia representativa, aunque esto siempre sea negado por sus defensores locales.³

La referencia a los momentos de apertura nos parece necesaria para buscar una mayor claridad en el curso político. Pueden haberse dado con mayor o menor movilización popular; suponen por lo general un acuerdo entre las fuerzas políticas y los poderes reales que éstas expresan, formalizadas o no en una nueva constitución. No han sacado de la escena a las fuerzas autoritarias que avalaron las dictaduras. Cabe por lo menos preguntarse, además, hasta dónde abren espacio o no a fuerzas antes excluidas, tras la derrota. Eso puede darse en el momento de la apertura o tiempo después.

La pregunta clave sobre los procesos de democratización se dirige a la conquista de condiciones de ciudadanía y a las posibilidades de participación de los sujetos colectivos que expresan a los explotados y marginados, con y sin mediaciones populistas. Para algunos observadores, el movimiento popular decae tras la apertura democrática.⁴ En el Perú no ha sido así, a pesar del impacto que tiene en el movimiento popular la guerrilla terrorista y la respuesta que recibe de los gobiernos. Justamente, la capacidad del movimiento popular de desarrollarse en la sociedad civil y, al darse la apertura, de tener acceso significativo a los municipios y al parlamento sin desactivar sus propias organizaciones, ha permitido, en nuestro caso, mayores avances en la democratización.

Lo que parece evidente desde nuestro caso es cómo se trunca, limita y hasta descompone un proceso de democratización cuando los avances participatorios y la apertura con la cual entronca no logran expresarse de manera consistente en la satisfacción real de necesidades urgentes y en

³ Bobbio, Norberto, *El futuro de la democracia*, FCE, México, 1986.

⁴ Barros, Robert, "Izquierda y democracia: debates en América Latina", en *Zona Abierta* 39-40, abril-septiembre, 1982.

un manejo económico que exprese y concrete, más allá de ocasionales avances, la lucha política. Mucho del proceso actual en el Perú parece jugarse en la capacidad de enfrentar a corto plazo la extrema pobreza generalizada y un crecimiento económico compatible con esta necesidad y con el cierre de las posibilidades de inversión tradicionales. Esta cuestión incluye, desde hace décadas, el agotamiento del patrón de desarrollo al que apostaron el Estado y los partidos, muy marcado por las restricciones internacionales.⁵

Y ciertamente se debilita el proceso con cualquier forma o tipo de guerra interna, aun cuando no sea, desde ningún ángulo, una acción de masas, como en este caso. Hay momentos en que el cúmulo de barbaridades que los dos gobiernos han hecho para combatirla deja la impresión de que la resultante no ha terminado por deteriorar del todo el régimen político, sólo por la amplitud del proceso de democratización precedente y por la manutención y hasta ampliación de los espacios para las fuerzas progresistas. Aun al lado de esta guerra sucia, el pueblo cree en sus organizaciones, en su lucha y en su capacidad de hacer cambiar a la sociedad. Y ha votado varias veces en esa gruesa dirección.

La coyuntura actual y la polarización desatada da también para la comparación con otras experiencias, en especial cuando se hace hincapié en la defensa institucional y el cuidado del mínimo de intereses allí representados. Estoy seguro de que violamos muchos cánones racionales. ¿Seguiremos con vida democrática o viene una alternativa de dictadura?

VINO VIEJO EN ODRES NUEVOS

Los rasgos del nuevo régimen político abierto en 1980 y negociado por los militares en el complejo proceso de transferencia⁶ son amplios, los más amplios de nuestra historia republicana. Hasta entonces, tanto el partido aprista como los partidos comunistas estaban excluidos por ser "partidos internacionales". Los analfabetos no votaban y se lograba hacer letra muerta de los principales derechos constitucionales, particularmente los relativos a elecciones y a organizaciones sindicales y populares con mayor facilidad que ahora. Esto cambió no sólo en el papel de la constitución. Son las relaciones de fuerza real, con un 30% de izquierda en la asamblea constituyente y un movimiento popular dinamizado, las que hacen que los espacios políticos del ochenta den amplia cabida al pueblo en viejas y nuevas vertientes. Allí concluye el gobierno militar.

En estos odres tiene que encajar el gobierno elegido en 1980, que coloca al presidente Belaúnde nuevamente en la escena, pero lejano ya de sus arranques populistas. Su victoria llena el vacío creado por la relación que hubo entre el APRA y la dictadura militar por la crisis de este partido

⁵ González de Olarte, Efraín, *Crisis y democracia: El Perú en busca de un nuevo paradigma de desarrollo*, Lima, IEP, documento de trabajo, núm. 21, 1987.

⁶ Pease García, Henry, *Los caminos del poder*, DESCO, Lima, 1979.

tras la muerte de Haya de la Torre; vacío que se acentúa por la incapacidad de la izquierda para unificarse antes de esas elecciones. Con Belaúnde hubo un intento de aplicar políticas neo-liberales, que terminaron de destruir la industria y el empleo, profundizando la miseria de las mayorías. La movilización popular respondió desde el campo sindical, desde el nuevo espacio municipal, cuestionando, pero sin precisar una oferta alternativa. El partido aprista, con nuevo y carismático liderazgo, pudo preparar su victoria aun sin presentar más alternativa que una genérica voluntad de cambiar el país. Sendero Luminoso pudo desarrollarse en varias regiones del país con su mensaje de muerte y destrucción, y ofrece, sin embargo, un lugar protagónico a la juventud que en este país casi no encontraba espacio.

Son muchos los jóvenes entre los 16 y los 23 años que hemos visto caer en esa opción, creyendo en la muerte y en el dogmatismo más radical de los últimos tiempos. Son pocos los signos de juventud que el gobierno belaudista podía dar. Vino viejo, o más bien pasado, venía a ocupar un espacio político que en su renovación encontraba su viabilidad. Lo evidente en la primera parte de la década es que no hay alternativas. Las recetas neo-liberales, sin imaginación, no sólo destruyen la economía y el tejido social y excluyen conscientemente a la gran mayoría, sino que al aplicarse en el conflicto pierden pronto su ortodoxia, para derivar en una política sin rumbo, una especie de "sálvese quien pueda" donde, por cierto, las cosas se hacen para salvar a los de arriba.

¿Cómo puede continuar hablándose de democracia cuando aparecen tumbas con desaparecidos y tras esto se evidencia el terror de Estado? Con menos indulgencia, ¿qué democracia puede subsistir cuando el deterioro de la economía popular hace precarios todos los derechos? Cuando la TBC ha regresado a torrentes, cuando la desnutrición infantil adquiere cifras monstruosas o cuando los precios ya no permiten subsistir —con un gobierno que perdió el control de la inflación. La democracia no se ve amenazada, sino burlada, y a la vez objeto de burla. Pero otra vez, las respuestas del pueblo organizado no están ni en la espontaneidad ni en la desesperación. El desarrollo de organizaciones de supervivencia, las iniciativas en alimentación y salud, los contados pero oportunos paros nacionales, marcan los hitos de la respuesta popular, en el nivel de sus organizaciones más significativas. Por eso, en 1985 la voluntad de cambio se expresa también en la Izquierda Unida y es más del 80% del electorado el que exige cambios no sólo de política económica, sino de partidos, personas y proyectos.

EL POPULISMO APRISTA Y UNA IZQUIERDA ENTRAMPADA

Pocos presidentes llegaron al gobierno con tantos recursos ganados a partir del voto. El carisma de Alan García y una campaña donde ofrecía todo a todos le dio las mejores condiciones para empezar a gobernar.

Sin duda, frente a sus genéricas propuestas programáticas era posible reaccionar afirmando que el presidente quería "hacer tortillas sin romper huevos". Sin embargo, una política económica innovadora, de corto plazo, le permitía tener tiempo para otras medidas y prolongar el entusiasmo inicial. Pero toda su apuesta estaba hecha a la reinversión de los principales grupos económicos —los 12 apóstoles— y éstos no respondieron, a pesar de recibir enormes incentivos.

Desde 1985 hay un proceso que personaliza no sólo la victoria, sino el acto de gobernar y hasta los conflictos parciales. Aquí ya no hay ministros, sino secretarios del presidente, único protagonista en términos reales, y así se desarrolla un proceso que llega a dar indicios de desgaste, con enfrentamientos en el APRA a partir de la renuncia del premier Alva Castro y con el impacto de un importante paro nacional en mayo último que mostraba todo lo irresuelto.

La salida presidencial, solitaria y personal, fue la estatización de la banca, las financieras y las empresas de seguros. ¿Qué propuesta programática hay a partir de eso? ¿Cómo se demuestra la voluntad de democratizar el crédito? Ministros y parlamentarios vacilantes, a duras penas pudieron con el debate y fueron retrocediendo. La izquierda aportó razones de su propio programa, críticas y demandas para una democratización real y ahora críticas a una resultante confusionista y llena de elementos de corrupción. Es que la IU venía de una larga crisis, sin perfil y sin líder, en lento proceso de reacomodo interno que aún no termina por sanjarse. No ha aprovechado estos años de deterioro aprista para desarrollar su programa hacia el noventa. Aparece desconcertada, perdiendo en esta coyuntura la vanguardia de la oposición, que pasa a la derecha.

El populismo aprista, experto en dividir a las masas y cooptar clientelística y carismáticamente, ha avanzado desde el Estado y pretende desde allí cambiar la sociedad, pero no le sale. Los sectores más conscientes y dinámicos del movimiento popular se enfrentan a esta alternativa, a su autoritarismo reforzado ahora por el manejo del aparato estatal. Ocurre que las dos oposiciones, de derecha y de izquierda, cosecharán ahora, a partir del enfrentamiento, al autoritarismo aprista, que se siente con mucha experiencia en el Estado.

Es que el partido aprista se refugia en el autoritarismo al no poder resolver su propia crisis. García significó el triunfo de una nueva generación sobre los viejos componedores, que se corrompieron en el pacto oligárquico de los años cincuenta y sesenta. Pero si bien los subordinó, no los derrotó ni eliminó. Allí están y han jugado un papel clave en el senado, impidiendo que a partir de la banca se tome un curso reformista.

La izquierda se entrapa a partir del rico proceso que vive en los ochenta. El pragmatismo que la lleva a la inclusión en la escena oficial, la aleja del movimiento popular. Éste dejó de ser su escenario propio y hoy, versiones radicalizadas se lo disputan, porque todo vacío se llena. No ha logrado empatar ambos escenarios.

Se entrapa también ideológicamente, a partir de la matriz marxista leninista que persiste en la mayoría de sus partidos y que no ha recibido el refrescante efecto del debate teórico sobre el socialismo y sobre las posibilidades de estas sociedades. Contrasta la pobreza del debate teórico con la riqueza de la práctica política de estos años en que se ha asumido la defensa democrática desde las masas, más de una vez. Seguir sosteniendo, como algunos, que “el poder nace del fusil”, cuando se está construyendo una organización popular desde los espacios democráticos y se enfrenta al mismo tiempo la agresión real de la aventura terrorista que se pretende imponer a las masas, no se trata tan sólo de una contradicción. Es un signo de una crisis que es indispensable superar antes de desarrollar y alcanzar condiciones de madurez.

En la coyuntura actual, la derecha liberal ha levantado cabeza tras dos años de ocupar un papel protagónico. Mientras alguno de sus voceros tradicionales clama por la insurgencia y otros hacen lo mismo por el golpe militar, puede decirse que el grueso de ésta se ha mantenido en los cauces constitucionales. ¿Por qué esta vez? Quizá los empresarios deban recordar que los militares del sesenta y ocho, al fin de cuentas, no les fueron fieles; quisieron hacer su propio ensayo de transformación social y agredieron a la clase dominante. ¿No será que aquí no hay otro camino que la transformación?

La derecha liberal procura renovar su mensaje ideológico y en nombre de los informales —a quienes ve como adalides del nuevo liberalismo— procura trazar una utopía que pueda ser aceptada por alguna parte del pueblo. Los militares, por otra parte, removidos por la crítica, pero defendidos en condiciones de impunidad por el presidente, tendrán que pensar dos veces antes de golpear. ¿Cómo se combate a Sendero desde el gobierno sin la protección civil? ¿No busca explícitamente Sendero una dictadura militar que amplíe el campo enemigo, para así expandirse? Quizá lo que llamamos democracia peruana sólo se mantenga y desarrolle por sus propias trampas; por lo tanto, tal vez allí deberíamos situar las preguntas.

INTERROGANTES SOBRE LA POSIBILIDAD DEMOCRÁTICA

Seguimos viviendo dentro de las reglas del juego que la constitución define como parte de la democracia representativa. Pero una parte significativa del país se encuentra en estado de emergencia. La tutela militar, expandida en su ámbito,⁷ impone sus términos en importantes regiones del Perú, sin que al respecto valgan los ofrecimientos de hacer prevalecer la autoridad civil. ¿Cuál es el límite de esta expansión? Pacificar el Perú es también transformarlo económica y socialmente. Pero es asegurar que la

⁷ Pease García, Henry, “Del reformismo militar a la democracia tutelada”, en *América Latina 80, democracia y movimiento popular*, Lima, DESCO, 1981.

institucionalidad democrática, la ley incluida, prive en todo el territorio. ¿Hasta dónde permitirá eso un poder militar que se refuerza con las vacilaciones poco democráticas de la civilidad burguesa? Lo cierto es que uno de los elementos de la precariedad pasa por la cuestión militar, pero no en abstracto. ¿Cómo se responde desde una perspectiva democrática a la subversión terrorista? La respuesta, que en primera instancia es política, pero que no puede dejar de lado la defensa y el hecho militar, tiene que ser dada, en primer lugar, por alguna fuerza democrática.

La precariedad en una sociedad como la peruana tiene que ver con la capacidad efectiva de transformación económica y social. En el debate sobre el Estado y su gobernabilidad tenemos que volver a la pregunta sobre si es posible hacer transformaciones profundas en la democracia. En nuestro caso, transformar es también conquistar consensos más homogéneos, un proyecto nacional capaz de unificar la diversidad enorme del Perú.

Przerowski razona sobre la lógica de las aperturas como negociación y propone que las instituciones tienen que garantizar que los intereses de las partes —de todas— no sean seriamente afectados. Con algo de escepticismo recuerda que Marx entendía imposible la combinación duradera de democracia política y propiedad privada. Aunque considera demasiado radical esta afirmación, concluye con una muy similar: la democracia sigue siendo rara —porque requiere un compromiso de clase— e inestable, justamente porque se basa en tal compromiso.⁸

Lo que me pregunto es si adaptarse a la inestabilidad no es parte de la precariedad y si por allí no está la salida —nunca lineal— en tanto, aun con fracasos y nuevos golpes, el tejido social que se va armando se retoma luego, al hacer crisis las dictaduras (cuyas crisis no son pocas ni magras). La apuesta democrática es pues, en mucho, la construcción de este tejido social.

La experiencia peruana muestra la resistencia efectiva, y no siempre por canales democráticos, de los grupos afectados. Más aún, estamos viviendo un proceso que puede terminar desestabilizando al gobierno —a veces con la cooperación de éste— por el enorme poder que tienen la derecha afectada en la prensa, el poder judicial, etcétera. La pregunta de fondo es: ¿tendrá éxito? Las trampas ya mencionadas, propias de la lucha social y de la amplia gama de contradicciones de la sociedad peruana, pueden llevar a que los iniciales llamados al golpe terminen llamando a derrotar al gobierno en las elecciones del noventa. Claro que allí se repite la pregunta: ¿dejarán esos grupos que otras fuerzas cambien el país? ¿Apostarán a conquistar el voto y a hegemonizar con una perspectiva moderna desde la derecha liberal? Y si no tienen éxito, ¿entenderán que el país tiene que cambiar y tiene que avanzar, o seguirán expoliándolo?

⁸ Przerowski, Adam, "La democracia como resultado contingente de los conflictos", en *Zona Abierta* 39-40, abril-septiembre, 1986.

Ciertamente, todo depende de relaciones de fuerza y no de buenos deseos; pero en esa fuerza hay una diversidad de actores que optarán, dentro o fuera de los procedimientos democráticos. Cómo construir la democracia no es sólo cuestión de procedimientos; mucho depende de lo que se logre en los márgenes del juego, incluso en la escena internacional, por ejemplo, con el problema de la deuda. En el Perú, la fragilidad burguesa tiene relación con su incapacidad histórica de ofrecer un proyecto atractivo, que cambie algo. Responder sólo con la fuerza y el golpe tiene el límite de empujar el carro de la subversión. ¿No empujan estos límites a insistir en la democratización?

Algo que apuesta en favor de la posibilidad democrática está en un rasgo reciente pero evidente de la cultura política: la necesidad de unidad y un sentimiento, o una cierta comprensión, de que la democracia, incluso con sus límites actuales, permite la inclusión. Esto incluye lo que significa tener documentos y votar en sectores antes excluidos, como los analfabetas.

¿Por qué, si no, es el discurso político triunfador aquél que convoca a la unidad, a la inclusión? Belaúnde y Alan García ganaron ofreciéndose como “presidente para todos los peruanos”. Barrantes ganó la alcaldía de Lima ofreciendo hacer de ésta, “una ciudad para todos”. ¿Corresponde este sentimiento de unidad, esta necesidad de inclusión, a rasgos excluyentes y marginantes de nuestra economía y nuestra sociedad? Lo que queremos destacar es que estos elementos pueden fortalecer una perspectiva democrática, además de alertar sobre las cuestiones de fondo que obligan a transformaciones sociales profundas.

Finalmente, hay preguntas que apuntan más en una dirección de largo aliento, pero que por ello mismo condicionan más el sentido del presente. Lo que aquí se ha acentuado, la democratización, es lo que hace posible que perdure este régimen constitucional, a pesar de todo. Esa democratización entre nosotros es más la vigencia de la organización popular en la fábrica, en el barrio o en el campo, que sólo una referencia al momento electoral. Desde el movimiento popular que impulsó esta apertura democrática, que persiste, que paraliza y marcha, que participa, que está presente en municipios y parlamentarios, pero que aún tiene una débil estructuración, desde allí la democracia se entiende como autogobierno de masas; se lucha por ella al tiempo que se demanda descentralización y regionalización. Se enfrenta la debilidad y las vacilaciones del populismo actual al tiempo que se soporta lo que significa el terrorismo. Aquí no preguntamos. Afirmamos que en esta dirección se consolida la perspectiva democrática. Es desde aquí que la precariedad puede ser enfrentada. Pero eso es todavía una opción que ningún mesianismo —ni el populista ni el terrorista— pueden aceptar.